



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, once de agosto de dos mil veintitrés

S21-009

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación sentencia
Demandante: **MARGARITA MARÍA POSADA DE VINCK**
Demandado: **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-005-2019-00429-01
Tema: reembolso aportes a salud
Decisión: **CONFIRMA CONDENA**
Link: [21-009 \(005-2019-00429\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, toda vez que la Dra. MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA se encuentra ausente de manera justificada, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada dentro del proceso de la referencia.

En los términos de la sustitución de poder otorgado por el Dr. CHARLES CHAPMAN LÓPEZ, se reconoce personería a la Dra. JULIANA ROSALES RAMÍREZ identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.128.418.045 y Tarjeta Profesional 202.198 expedida por el C. S de la J., para que continúe representando los intereses de ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 27** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita la demandante que se declare que ITAÚ CORPBANCA S.A. está obligado a asumir el pago total de los aportes en salud establecidos por el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, no por

dos años, sino de manera incondicionada e ilimitada de acuerdo al acta de conciliación suscrita entre las partes el día 26 de mayo de 1998.

Así mismo, que se declare que a partir de mayo del 2000, la entidad demandada ha incumplido con lo acordado en el acta de conciliación y que como consecuencia de ello reconozca el valor total de las cotizaciones obligatorias en salud que corresponden a la pensión, tanto de jubilación como la de vejez que reconoce Colpensiones.

Finalmente, solicita que ITAU CORPBANCA pague o reembolse de forma indexada la totalidad de los dineros retenidos por aportes a salud, tanto los realizados por la entidad bancaria en la pensión de jubilación desde el 18 de mayo de 2000, como los efectuados por Colpensiones frente a la pensión de vejez desde el 1 de agosto de 2009 en adelante y a continuar otorgando dichos aportes en su totalidad hacia el futuro.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que prestó servicios de forma personal y continua al Banco Santander Colombia S.A. en la ciudad de Medellín, desde el 3 de octubre de 1977 hasta el 18 de mayo de 1998.
- ✓ Que el Banco Comercial Antioqueño cambió su nombre por Banco Santander Colombia S.A, después varió su razón social por Banco Corpbanca Colombia S.A., y hoy se denomina Itaú Corpbanca Colombia S.A.
- ✓ Que la relación laboral con el banco accionado terminó por mutuo acuerdo mediante acta de conciliación celebrada en el Ministerio de Trabajo el 26 de mayo de 1998. Que en dicha acta la entidad bancaria le reconoció la pensión de jubilación a partir del día 18 de ese mes y año.
- ✓ Que dicha acta contiene la obligación, a cargo de la entidad, relacionada con el pago de las cotizaciones o aportes obligatorios en salud, según la cual asumiría el costo que le correspondía como pensionada, lo que en efecto sucedió, pero sólo hasta el 18 de mayo del 2000 cuando la accionada comenzó a efectuar los descuentos del 12%.
- ✓ Que el otrora ISS le reconoció la pensión de vejez a partir del 24 de diciembre de 2008 mediante Resolución 034218 de 2009. Desde agosto de ese año, Colpensiones le ha retenido sobre el valor de tal prestación, el aporte de salud de conformidad con el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.
- ✓ Que la obligación contenida en cláusula del acta de conciliación aludida, no está sujeta a un lapso de dos años, ni a una condición o restricción.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que únicamente eran ciertos los relacionados con la existencia de la relación laboral, los extremos temporales y los cambios de razón social de la entidad. Aclaró que a través del acta de conciliación las partes dieron por terminado el contrato de trabajo de mutuo acuerdo reconociendo, de un lado, una bonificación de retiro extraordinaria, y de otro lado, de manera transitoria, la pensión convencional hasta que cumplierse los requisitos de edad exigidos por el ISS, momento a partir del que únicamente otorgaría el mayor valor de la prestación. Niega de esta manera que se hubiese obligado a pagar de manera vitalicia la totalidad de cotizaciones a salud, precisando que en la cláusula quinta sólo se convino que asumiría el costo de aquellos aportes por el término de dos años, tasados en \$3.110.314, es decir, por única vez y de manera anticipada, lo que en efecto aconteció, expidiéndose un paz y salvo, punto en el que destaca que, por ministerio de la ley (art. 143 Ley 100/1993), le correspondía a la pensionada aquella erogación.

Que en tal sentido, NO ha desconocido y/o incumplido el acuerdo, únicamente apreciaba una interpretación errada del clausulado por parte de la que fuese su trabajadora, la que califica como carente de fundamento, aunado a que la inexistencia de una reclamación NO sólo tenía implicaciones frente a la prescripción, sino que además denotaba una aceptación de los términos allí plasmados, recalcando que en todo caso, en la conciliación sí se incluyó un límite de tiempo, siendo este el verdadero querer de las partes y el único efecto útil que podía dársele a la cláusula: atenuar la obligación de la pensionada en ese primer lapso, no así, modificar una previsión legal.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 18 de noviembre de 2020, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín declaró que la sociedad ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., conforme lo acordado en el acta de conciliación del 26 de mayo de 1998, debía asumir, reconocer y pagar el valor de los aportes en salud que regula el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, pues allí se convino tal obligación como pura y simple y sin que estuviera sometida a plazo extintivo.

De esta manera condenó a dicha entidad a reconocer y pagar a la demandante la suma de \$14.234.250 por concepto de aportes en salud que descontó la entidad desde el 23 de agosto de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2020, suma que debía cancelar debidamente indexada.

Adicionalmente, a partir del 1 de diciembre de 2020, ordenó al banco continuar cancelando a la demandante la suma mensual de \$295.650, por concepto de aportes para salud, mientras persistan las causas que le dieron origen, sin detrimento de los incrementos que sobre dicho concepto se causen en lo sucesivo.

Declaró la prosperidad parcial de la excepción de prescripción y absolvió a la entidad de las restantes pretensiones incoadas en su contra. Finalmente condenó en costas a la parte demandada, fijando como agencias en derecho la suma de \$2.467.318, equivalente al 5% de la condena, más 2 SMLMV.

Dentro del término concedido por la ley, la entidad accionada interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

Tras dar lectura a la cláusula quinta controvertida, examinar sus alcances y efectuar algunas consideraciones en torno a la autonomía de la voluntad y la conciliación, sostuvo que las partes libremente convinieron, de forma pura y simple, sin plazo extintivo o condición alguna, que el banco asumiría el pago de las cotizaciones a salud establecidas en la ley, precisamente con ocasión de la jubilación que voluntariamente le reconoció a la demandante. Así las cosas, desde su redacción, NO se limitó a dos años dicho reconocimiento, siendo esta la única interpretación sistemática y gramatical admisible, sin que fuera dable suponer que en dicha prerrogativa iba inserta una condición extintiva implícita.

Precisó que la tardanza en su reclamación, sólo tenía efectos de cara a la prescripción, fenómeno que sólo tuvo la virtualidad de interrumpirse con la presentación de la demanda (2019), siendo inanes los efectos de aquella reclamación presentada 7 años antes (2012).

2.2. RECURSO DE APELACIÓN ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Comienza por destacar que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, y su contenido debe interpretarse de cara al efecto útil. Que en este asunto las partes suscribieron la cláusula quinta, la cual cita, en la que se estipuló que el banco reconocería al trabajador, a su retiro, un pago anticipado equivalente al valor de las cotizaciones en salud por el período de dos años, es decir, se otorgaron por un período expresamente determinado, no se menciona que fuera indefinido o permanente. Que incluso en el acta se ratifica que las cotizaciones serían asumidas por el trabajador, siendo ello lo que quedó plasmado, comportando esta la adecuada intelección, es decir, que el pensionado, conforme lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debía asumir su obligación, insistiendo que ello no le correspondía al banco, por lo menos NO más allá de los dos años acordados a título de beneficio adicional.

Destaca que las cotizaciones son para la EPS, no para el pensionado, y en este caso se entregaron a la demandante, de ahí que no tuviese ningún sentido, bajo la interpretación planteada por la parte actora, girarlo indefinidamente al empleado. Por tanto, era claro que en la conciliación sí se incluyó un límite de tiempo para el reconocimiento del beneficio, entregado por una sola vez y de manera anticipada como una bonificación especial, correspondiente al valor de los aportes en salud de dos años, esto es, entre el 18 de mayo de 1998 y el mismo día y mes del año 2000.

Que este era el sentido genuino de la cláusula, pues al estar contenida en un contrato bilateral, debía interpretarse de conformidad con las reglas de la legislación civil, es decir, atendiendo el efecto útil o jurídico que esta pudiese producir, o conocida la intención de los contratantes, debía estarse a ella, más que a lo literal de las palabras. Que fue este el razonamiento plasmado en la SL18096 de 2016. Que en consideración a ello, las partes únicamente ratificaron que el trabajador tenía a cargo la obligación de realizar los aportes a salud y era depositario de un beneficio concedido, insiste, por una única vez de manera anticipada, para alivianar de manera temporal la nueva carga que debía asumir.

Que además los principios orientales de las leyes laborales propendían por brindar un equilibrio entre las partes en *coordinación económica y social* que permitan, de acuerdo al adecuado desarrollo de las relaciones laborales, darle a la cláusula de marras, una interpretación disímil al otorgado por el a quo y la parte actora, precisamente para evitar un protuberante desequilibrio para el banco, quien ya, de manera *supra legem*, se obligó libremente a reconocer una pensión jubilación voluntaria cuando la demandante sólo tenía 48 años, y luego, a compartir tal diferencia entre esta pensión y la que reconociera el sistema.

Que efectivamente a la demandante se le debe aplicar lo establecido en el art. 143 de la Ley 100 de 1993, es decir, realizar los aportes en salud por ostentar la calidad de pensionada, sin que exista un justo título que fundamente la inexistencia de esa retención con categoría de derecho adquirido.

Recuerda que a voces de lo normado en el art. 52 del Decreto 806 de 1998, aunque la pensión sea compartida, la obligación de cotizar se predica respecto de la totalidad del monto que recibe por concepto de pensión, de ahí que las dos entidades pagadoras de la pensión, efectúen los correspondientes descuentos del 12%.

Que difiere de la manera en cómo fue resuelta la excepción de prescripción, toda vez que operó dicho fenómeno en su totalidad sobre la acción, dado que el acuerdo data del 12 de mayo de 1998 y la demanda fue presentada mucho tiempo después, concretamente en el año 2019.

Considera que también debe abordarse el tema de la cosa juzgada por cuanto las partes celebraron un acta de conciliación, y en virtud de la misma zanjaron cualquier eventual diferencia en virtud de la relación laboral y su desvinculación, entre los que se encuentran los pagos a seguridad social en salud, aquí pretendidos, documento donde se dejó expresa constancia que el empleador pagó todos y cada uno de los salarios, prestaciones sociales, y la trabajadora declaró recibir los pagos a entera satisfacción, es decir, aceptó que estaba a paz y salvo por todo concepto derivado de aquella relación laboral, incluyendo aportes a la seguridad social, máxime si la actora ya se encuentra pensionada, además leyó el acta en comento y la firmó en señal de aceptación, con su puño y letra. Por tanto, el acuerdo conciliatorio surtió los efectos de la cosa juzgada según lo consagrado en el art. 28 de la Ley 640 de 2001 y el art. 78 del CPT y la SS.

De otro lado, se opone a las costas impuestas y tasadas por el despacho.

2.3. ALEGATOS

2.3.1. ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Solicita que se revoque la sentencia condenatoria emitida, por adolecer de los yerros que le endilga, entre ellos por la interpretación del acta y contrato de transacción suscrito por las partes. Expresamente indica que:

(i) Que el Banco le reconocería a la trabajadora a su retiro del banco, un pago anticipado equivalente al valor de las cotizaciones en salud por el período de un año, como parte del bono por transacción y/o conciliación por valor de \$3.110.314 (ver certificado de acumulado de conceptos por empleado del año en detalle bonificación especial) para atenuar la carga de la trabajadora en relación con los aportes a pensión que estaban su cargo.

Tal pago anticipado y directo a la empleada, no modifica la previsión legal que establece en cabeza del pensionado, su obligación de asumir las cotizaciones en salud, que le corresponden. De hecho, en los acuerdos, entre paréntesis, se precisó con respecto a estos aportes a salud que: "... (en el caso del pensionado está totalmente a cargo de éste)..."

El único objeto del pago anticipado fue atenuar la obligación de la pensionada en el primer año de su pensión, de tal manera que el anticipo se cruzara con lo que el banco le descontaría mensualmente en ese primer año por efectos de cotizaciones en salud, de acuerdo con la ley.

Nótese que el Banco NUNCA dejó de efectuar los descuentos a salud, desde que inicio el disfrute en mayo de 1998, lo anterior se prueba con los soportes de pago mensual presentados con la demanda, en ese sentido entonces, el Banco cumplió con lo acordado, que fue reconocer anticipadamente el valor de un año de cotizaciones por valor de \$3.110.314 (ver certificado de acumulado de conceptos por empleado del año 1998 en detalle bonificación especial).

(ii) Que el pago anticipado de las cotizaciones en salud se reconoce por un período determinado, expresamente se pactó que un año, (no hay pacto alguno contrario que señale que era indefinido o permanente), pago que se gira a la empleada y no a la EPS.

El Banco le hace los giros cada mes a la EPS, luego de aplicarle el respectivo descuento a la pensionada, práctica que se hace desde el primer mes de pensionada de la trabajadora en mayo de 1998, hasta la fecha.

No hay que olvidar, que el pago de las cotizaciones es para la EPS y no para el pensionado; luego entonces, si el pagador de la pensión es quien asume la carga de la cotización no tiene ningún sentido girarlo anticipadamente a la empleada pensionada, cuando ella no es la que la que lo debe recibir, ni es quien lo giraba. Si el Banco es quien lo gira y paga a la EPS, no habría que hacerle ningún pago a la empleada y mucho menos anticipadamente.

En consecuencia, es claro que en la conciliación sí se incluyó un límite en el tiempo para el reconocimiento del beneficio, el cual se entregaría por una sola vez de manera anticipada como bonificación especial, correspondiente al valor de los aportes a salud de un año.

Posteriormente cita algunos fragmentos de la sentencia SL13704 de 2016 en relación con la obligación, a cargo de los pensionados, de efectuar los aportes a salud, para señalar que NO era acertado entender un beneficio que se otorgó por una sola vez como bonificación especial, sería la asunción de una carga que nunca ha tenido el Banco, por el contrario, es claro que cumplió con lo pactado, esto es, canceló la bonificación anticipada y la realización de los descuentos de salud mes a mes hasta la fecha.

2.3.2. ALEGATOS DEMANDANTE

Manifestó que en el proceso quedó acreditado que el banco demandado se obligó con la accionante a pagarle indefinidamente las cotizaciones obligatorias en salud, de conformidad con el acta de conciliación suscrita entre las partes. Además, del texto de la cláusula del acta de conciliación suscrita entre el Banco demandado y la demandante, se concluía con total claridad que la entidad accionada se obligó a favor de la demandante, asumir por éste el pago de las cotizaciones obligatorias en salud que establece el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, por el tiempo que la pensionada se encuentre cotizando por este riesgo y no sólo por el término de dos años; es decir, que la liberó de dicha obligación para asumirla directamente el Banco, de manera indefinida en el tiempo, aunque se hubiere cuantificado el valor de los aportes por dos años, lo que apenas comportaba una forma de pago anticipado de dichos aportes, calculados hasta el momento de la firma del acta, sin que ello implicara que dicho pago anticipado tenía la virtualidad de eliminar la obligación a futuro.

Que del contenido del acta se infería que el Banco real y efectivamente asumió como propia la obligación del pago de los aportes obligatorios en salud, de manera incondicionada e ilimitada en el tiempo, sin restricción de ninguna naturaleza, lo cual se desprende de la simple lectura del aparte transcrito, particularmente, cuando lo expresa diciendo que *“...El Banco asumirá los aportes obligatorios en Salud establecidas en el Artículo 143 de la ley 100 /93 (que en el caso del Pensionado está totalmente a cargo de éste) para lo cual el Banco dará por el término de dos años en forma anticipada al momento de retiro el valor (\$3.110.314.00), según la cláusula Quinta.”*

Se desprende pues de lo anterior, que la obligación en cuanto a los aportes para salud, por voluntad del Banco, consignada en el acta de conciliación, quedó totalmente a su cargo, es decir, del BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. (hoy ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.), en forma ilimitada en el tiempo, sin ninguna restricción, subrogando al pensionado en el pago del aporte para salud, sin que el pago anticipado que ofrece a renglón seguido, signifique una mutación de la obligación inicialmente asumida hacía el futuro, porque se trata simplemente del pago anticipado de los aportes por dos años.

Añade que conforme al artículo 27 del Código Civil, cuando el texto es claro no debe buscarse interpretaciones, sino atenderse al tenor literal de las palabras, que para el caso, no expresa límite temporal en el pago de los aportes para salud, sino que comporta una obligación indefinida y a futuro, razón por la cual la conclusión del Juzgado resulta totalmente ajustada al texto. De la misma manera, si hubiere incertidumbre en cuanto al alcance del acta, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política, en caso de duda en la aplicación e interpretación de las

fuentes formales de derecho, debe aplicarse la condición o situación más favorable al trabajador, tal como se lo ordena la norma constitucional mencionada. En igual sentido se refiere el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo.

Finalmente, menciona que en idéntico sentido al fallo de primera instancia se han pronunciado la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y el Tribunal Superior de Medellín- Sala Laboral, en las providencias anexas con la demanda, entendiéndose que el banco demandado debía asumir el pago total de las cotizaciones obligatorias en salud, tanto las que corresponden por la pensión de jubilación que pagó el Banco, como las que afectan la pensión por vejez que le viene reconociendo Colpensiones, pues la accionada se comprometió a asumirlo como beneficio especial concedido en la conciliación y sobre la pensión en su totalidad.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De los argumentos esbozados por la Juez de primer grado en la providencia, así como de lo planteado por la entidad recurrente, a juicio de la Sala el análisis se contrae a determinar, inicialmente, si en virtud de los efectos de cosa juzgada que goza la conciliación, no es posible abordar el fondo de la controversia. De ser factible su estudio, se examinará cuál es la intelección que debe dársele a la cláusula quinta del acta de conciliación que se refiere al pago de las cotizaciones obligatorias para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para efectos de establecer si la demandante se abrogó de dicha obligación legal, asumiéndola quien fuere su empleador, o si, por el contrario, otro es el sentido *genuino* de aquella disposición.

En caso afirmativo se analizará si obró el fenómeno jurídico de la prescripción, y por último, lo atinente a la inconformidad respecto del monto de las costas tasadas en primera instancia.

4. CONSIDERACIONES

Bajo el matiz de los EFECTOS DE LA COSA JUZGADA, conforme lo esbozado en el recurso de alzada, la entidad demandada pretende impedir que la Sala efectúe un pronunciamiento de fondo. Y es que la cosa juzgada, por regla general, implica que no es posible someter a un proceso el caso ya resuelto por las partes, dígase mediante conciliación o transacción, pues tal decisión resulta vinculante para el órgano jurisdiccional, ya que este atributo limita a la autoridad

al no poder alterar los términos de un acuerdo, garantizando la seguridad jurídica, pues el mismo es definitivo e inmutable.

Para el caso, resulta indiscutible que las partes suscribieron un acuerdo, precisamente una de sus cláusulas edifica la controversia suscitada.

En todo caso, en este punto, lo relevante es resaltar que para el 26 de mayo de 1998, conforme se aprecia a folio 26 a 29 del archivo 01 del expediente digital, las partes firmaron un acta de conciliación, cuyo propósito, única y exclusivamente, era para finiquitar por mutuo consentimiento la relación laboral que los unía desde octubre de 1977. Tras esbozarse las súplicas de la trabajadora, se pactó el reconocimiento de prestaciones legales y extralegales, además de una bonificación por retiro, una pensión convencional transitoria y otras prebendas. Se estipuló que la empresa quedaba a paz y salvo por todo concepto **derivado de la relación**, y advirtieron que lo allí resuelto hacía tránsito a cosa juzgada.

He ahí un primer aspecto que deja entrever el camino de este medio exceptivo toda vez que la súplica incoada en este trámite NO se deriva de la relación, no en estricto sentido, sino de los términos en que se pactó una de las prebendas en dicha conciliación.

En todo caso, tenemos que se ha concebido la conciliación como uno de los varios mecanismos alternativos de solución de conflictos a través del cual, como una excepción a esa regla general de que la función jurisdiccional recae en el Estado, las partes logran llegar a un acuerdo directo con acompañamiento de un mediador. Para mayor ilustración puede acudirse a lo dispuesto en la Ley 640 de 2001 con las modificaciones introducidas por la Ley 1564 de 2012.

El acuerdo de conciliación válidamente celebrado (capacidad, consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícitos) según los principios generales del derecho, debe tenerse como ley para las partes que lo suscriben. Quiere decir lo anterior que cuando el pensamiento y el querer de quienes firman el acuerdo queda plasmado en un clausulado, disposiciones que en todo caso deben ser claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de las partes.

En éste orden de ideas, es viable concluir que el acta suscrita es la concreción de una conciliación, mecanismo de solución de conflictos que está amparado por la fuerza de la cosa juzgada, por lo que en principio, no puede ponerse en tela de juicio lo acordado por las partes;

por consiguiente, se enerva cualquier litigio que se intente posteriormente a su celebración sobre asuntos que en forma concreta o implícita precavieron las partes.

Consúltese el Decreto 1818 de 1998 en cuyo artículo 3 se estipuló que:

ARTICULO 3o. EFECTOS. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.

La cosa juzgada, como se indicó en precedencia, impide someter a un nuevo proceso el caso ya resuelto. Pero es preciso advertir que esta particularidad de la jurisdicción está sometida a un límite subjetivo referido a la identidad de partes, y un límite objetivo ligado a la identidad de objeto (petitum) y de causa petendi (fundamento inmediato del derecho que se ejerce).

En relación al petitum es importante aclarar que para que haya identidad en éste, el proceso debe versar sobre un objeto, en donde las prestaciones o declaraciones que se reclaman son precisamente los puntos sobre los cuales ya se concilió.

Y justamente ahí estriba la confusión de la recurrente, pues NO hay identidad de objeto ni de causa. El litigio NO versa sobre la forma en que terminó el contrato de trabajo, que claramente fue de mutuo acuerdo previo pago de ciertos emolumentos. Aquí la controversia se edifica en la interpretación de una de esas cláusulas. Así las cosas, en gracia de discusión, para que fuese admisible declarar los efectos de la cosa juzgada, las partes tendrían que haber zanjado sus diferencias en torno a la intelección de la cláusula quinta. Si ello NO ha sucedido, menos aún se puede invocar esta figura para enervar el análisis que le compete efectuar a esta Magistratura.

Aclarado lo anterior, procedemos a examinar el contenido de la cláusula quinta del acta de conciliación suscrita entre las partes, cuyo tenor es:

QUINTA: El Banco asumirá el costo de los aportes obligatorios en Salud establecidas en el Artículo 143 de la ley 100/93 (que en el caso del Pensionado está totalmente a cargo de éste) para lo cual **EL BANCO** dará por el término de dos años en forma anticipada al momento de retiro el valor (\$3.110.314.00) de estos aportes, calculados con base en el último salario promedio devengado por el trabajador.

Frente a la anterior cláusula manifiesta la entidad demandada que dicha prebenda se otorgó a favor de la jubilada como un beneficio extralegal y transitorio pues al margen de las palabras utilizadas, otro era su espíritu, dado que se pactó exclusivamente por el término de dos años y no de manera indefinida, posición de la que difiere el a quo, avalando la intelección que efectúa la parte actora, según la cual, desde su redacción, dicha obligación NO se condicionó en el tiempo.

Ciertamente, resulta imposible dar un sentido diferente a la cláusula, como lo pretende la parte demandada, pues otra cosa se desprende de su literalidad. De su redacción no surge un contexto diferente toda vez que, según la forma como quedó plasmada, no fue sometido el pago de aportes a salud a límites o condicionamientos.

No descarta la Sala que la génesis de aquella estipulación, o quizá la intención de las partes, fue limitar a un año el pago de los aportes a salud. Empero, ello sólo tendría la vocación de comportar simples suposiciones sin respaldo probatorio, enfrentadas a un gran obstáculo ya que otra cosa fue lo quedó escrito en el acta de conciliación. Aunado a ello, el silencio de la reclamante NO desdibuja la literalidad de las palabras que en tal acta quedaron escritas, ni extingue una obligación que por esencia es de tracto sucesivo, asumiendo el empleador, de manera indefinida, una erogación que normalmente estaría a cargo de la persona pensionada y/o jubilada.

En consecuencia, NO puede acudirse a una intelección diferente, precisamente porque en realidad NO existe controversia en cuanto al sentido genuino de la misma, no admite ambigüedades en cuanto a la continuidad de la obligación del banco, el que únicamente estipuló que los dos primeros años se pagarían por adelantado. Quiere ello decir que los restantes años los asumiría mes a mes.

Es decir, ni siquiera se torna necesario acudir a principios como la favorabilidad, dado que el texto no admite dubitativas. Tampoco existe una forma de establecer que otro era el pensar, el querer o la intención de las partes. Y en ello cimenta el banco su defensa, lo que ciertamente es del fuero interno, de difícil probanza, máxime cuando para el caso se exteriorizó en un sentido absolutamente contrario al que se replica como genuino.

La misma línea de pensamiento ha compartido de manera pacífica la Corte Suprema de Justicia, cuando en varias ocasiones se ha ocupado de analizar casos de contornos muy similares a este.

Consúltense para el efecto las sentencias SL3448-2018, SL12921-2017, SL17205-2015, SL395-2013. En el primero de los casos aludidos, la Sala de Casación Laboral explicó que:

Luego de la lectura integral de la referida cláusula, la Corte objetivamente encuentra que no le asiste razón a la censura, puesto que la estructura de lo allí acordado, parte de la solicitud que hizo el entonces trabajador a la demandada, para que asumiera el valor de los aportes allí mencionados, y luego en el inciso cuarto de dicha cláusula, el banco demandado acogió esa propuesta, asumiendo el pago de las cotizaciones obligatorias en salud de que trata el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, lectura que

surge de manera simple e incluso literal del aludido inciso y en armonía con el texto, se insiste, integral de esa disposición extralegal.

No es cierto, como lo afirma la censura, que el *ad quem*, del texto «*literal del acta de conciliación que nos hemos permitido transcribir no presenta la posibilidad como lo señala el Tribunal de dos interpretaciones*», puesto lo que contrariamente dedujo el juez plural, fue que **no existía la posibilidad de dos interpretaciones para dicha cláusula convencional**. Ciertamente así razonó la segunda instancia:

*Es por lo anterior, que este juez de apelaciones entrará a analizar si el texto estudiado tiene claridad en sus líneas o se hace necesario estimar el alcance de lo convenido entre las partes empleando otras formas de interpretación, revisado minuciosamente el texto replicado revisado minuciosamente el texto replicado aprecia esta colegiatura que la activa al indicar que “asumir el costo de las cotizaciones obligatorias en salud establecidas en el artículo 143 de la ley 100 de 1993”, indudablemente se atribuye para sí el reconocimiento de los aportes en salud que efectúa o el pensionado y al manifestar que “para lo cual el banco de la por el término de un año en forma anticipada al momento del retiro el valor de estos aportes” reafirma su intención en tanto establece una forma de pago para el primer año de toda la obligación, y siendo así, no puede darse otra interpretación al aparte discutido puesto que **en ningún momento se estipuló de manera taxativa término alguno por el cual duraría el pago los aportes a la salud y además el pago anticipado durante un año lo que refleja es el aporte a una obligación adquirida, lo cual no cambia el deber de la demandada una vez vencido el tiempo pagado.** (Subraya a propósito).*

Así que **no hubo la posibilidad de realizar dos interpretaciones**, pues para el juez de apelaciones, únicamente encontró razonable la que dedujo de su texto, la cual al coincidir con el entendimiento que le ha otorgado la Sala a esta misma cláusula, no pudo el Tribunal incurrir en el yerro fáctico endilgado. (Resaltos de la Sala)

Y en la sentencia SL1955-2018 en donde justamente se discutía la misma obligación de pagar el aporte del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y en donde actuó como demandada la misma entidad aquí enjuiciada, replicando los razonamientos plasmados en otros fallos (SL13279-2017 y SL1134-2018), señaló que:

Pues bien, de la estipulación transcrita, la Sala encuentra que el Tribunal no incurrió en los desaciertos fácticos que se le acusan, puesto que de su análisis no solo se puede concluir que el compromiso adquirido por el demandado, respecto de los aportes obligatorios a salud, consagrados en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, **no estaba sujeto a término o condición**, sino que además, el Banco se obligó a pagar en forma anticipada el valor correspondiente a un año de dichas cotizaciones, sin que esta última obligación extinguiera o modificara el pago de la primera. (Resaltos de la Sala)

Y en la SL17205-2015 la Corte adujo que un pensamiento contrario tergiversaría flagrantemente su contenido al darse una lectura que desconocía o negaba palmariamente sus voces objetivas. Esto dijo:

Visto lo anterior, corresponde recordar una vez más por esta Corporación que se presenta yerro evidente en la valoración de un documento cuando, al apreciarse, se tergiversa flagrantemente su contenido con una lectura que desconoce o niega palmariamente sus voces objetivas, lo cual fue justamente lo sucedido en la decisión impugnada, puesto que el tribunal se reveló abiertamente con el contenido del acuerdo, al ponerlo a decir lo que este no expresaba, como fue suponer que allí se había acordado la obligación de pagar los aportes obligatorios a salud a favor del trabajador pensionado y a cargo del empleador, solamente por el término de un año, cuando, sin

hesitación alguna, lo cierto es que el citado compromiso fue adquirido sin límite de tiempo, y la referencia que se hizo al periodo de un año claramente se entiende que fue con relación al pago anticipado de los aportes por este lapso, para que el banco se los pagara al trabajador saliente al momento de su retiro

Ahora, ello NO implica que la decisión aquí adoptada, basada en los muchos o pocos casos resueltos por homólogos o superiores, este automatizada, pero indiscutiblemente sí comportan un referente dado que el clausulado, en todos los eventos, es de idéntico contenido obligacional, diferenciándose unos de otros únicamente por los datos propios del trabajador suscriptor de la conciliación o el numeral del acta, de ahí que resulte factible acoger un claro precedente, edificado en el mismo asunto, máxime cuando ningún elemento permite a la Sala apartarse del genuino entendimiento del clausulado.

De otro lado, considera la apoderada recurrente que el paso del tiempo extinguió el derecho. Empero, parece olvidar que NO se trata del pago de una suma única, SINO que lo aquí reclamado es el reconocimiento de una obligación de tracto sucesivo, de ahí que, como acertadamente lo determinó el juez, lo que se aplica es el término trienal que consagra el art. 151 del CPT y la SS, habiendo operado el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de los haberes causados con antelación al 23 de agosto de 2016 (tres años antes de radicarse la demanda), tal y como lo tuvo en cuenta el fallador al delimitar las condenas.

De la misma manera lo estimó la Corte Suprema de Justicia, cuando en sentencia de instancia, SL 7205-2015, adujo que:

En cuanto a la prescripción alegada por la demandada con el fin de enervar en su totalidad el derecho, materia también de la apelación, y que el a quo, al resolverla como previa, la declaró parcialmente respecto de las sumas descontadas entre el 15 de septiembre de 1998 y el 27 de abril de 2003, en atención a la fecha de la presentación de la demanda, decisión que fue confirmada en segunda instancia (fl. 107 y ss), corresponde decir por esta Sala que, al no haber variado en la sentencia la fecha de exigibilidad de las obligaciones objeto de condena, ni la de la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda, como tampoco el carácter de tracto sucesivo de la obligación a cargo del empleador de pagar la totalidad de los aportes a salud, criterios que determinaron la prosperidad de la excepción, pero de forma parcial, conforme a la decisión del juez de primera instancia debidamente ejecutoriada, el banco demandado deberá estarse a lo resuelto por el a quo mediante auto del 5 de octubre de 2005 y confirmado por el tribunal en decisión de fecha 8 de febrero de 2008.

Quiere esto decir, claramente, que el paso del tiempo o el silencio de la reclamante, únicamente incide en el valor de la condena, en su tasación, pero NO implica la pérdida del derecho como lo plantea la recurrente.

Finalmente, encontramos que la entidad bancaria manifestó su descontento con el monto de las agencias en derecho liquidadas en primera instancia, NO obstante, olvidó fundamentar su

petición para efectos de examinar tal aspecto. Ello podría comportar un limitante, empero, a igual conclusión llegaría la Sala en torno a abstenerse de resolver, por cuanto otra es la oportunidad procesal para manifestar su descontento con el valor de las costas.

En este orden de ideas, se confirmará la decisión adoptada de primera instancia, por encontrarla ajustada a derecho y acorde con el criterio jurisprudencial imperante en la materia. Se condenará en costas en esta instancia a la parte demandada por no haber tenido éxito en el recurso de apelación. Se fijará como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

4 DECISIÓN DEL TRIBUNAL

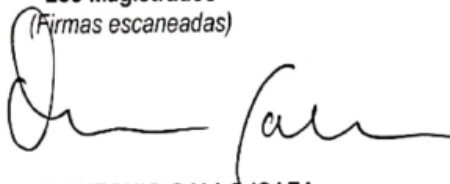
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARGARITA MARÍA POSADA DE VINCK** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 32.529.388, contra **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de la parte demandada. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Sin firma por ausencia justificada



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación sentencia
Demandante:	MARGARITA MARÍA POSADA DE VINCK
Demandado:	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-005-2019-00429-01
Tema:	reembolso aportes a salud
Decisión:	CONFIRMA CONDENA
Fecha de la sentencia:	11/08/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 14/08/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario